

Oaxaca: memoria viva, justicia ausente

Luis Hernández Navarro*

La protesta oaxaqueña ha sido una de las expresiones de descontento social más radicales y profundas que se han vivido en México en años recientes. Entre el 14 de junio y el 29 de noviembre de 2006, se vivió en la entidad una severa crisis del modelo de mando, en la que se generaron formas de auto-organización popular inéditas y se vivieron protestas novedosas. La desobediencia civil estuvo muy cerca de convertirse en un levantamiento popular. El movimiento dejó de ser una lucha tradicional de protesta y comenzó a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Esta es la historia del episodio.

Hay luchas sociales que anticipan conflictos de mayor envergadura. Son una señal de alarma que alerta sobre graves problemas políticos sin solución en un país. Las huelgas de Cananea y Río Blanco constituyen uno de los antecedentes reconocidos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. La revuelta de 1905 en Rusia mostró el camino que, 12 años después, fue recorrido por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre.

La movilización magisterial-popular que, a partir del 22 de mayo de 2006, sacudió a Oaxaca durante más de un año, y cuyos ecos aún se hacen sentir, es una expresión de este tipo de protestas. Puso al descubierto el agotamiento de un modelo de mando, la crisis de relación existente entre la

clase política y la sociedad, y la vía que el descontento popular puede seguir en un futuro próximo en todo el país.

La protesta comenzó como expresión de la lucha del magisterio en la entidad por una demanda: aumento salarial por la vía de la revalorización por vida cara. Pero el intento del gobierno estatal por acabar con el movimiento utilizando la represión salvaje el 14 de junio de 2006, radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad.

La protesta oaxaqueña ha sido una de las expresiones de descontento social más radicales y profundas que se han vivido en México en años recientes. Entre el 14 de junio y el 29 de noviembre de 2006, se vivió en la entidad una severa crisis del modelo de mando, en la que se generaron formas de auto-organización popular inéditas y se vivieron protestas novedosas.

La desobediencia civil estuvo muy cerca de convertirse en un levantamiento popular. El movimiento dejó de ser una lucha tradicional de protesta y comenzó a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Durante meses, las instituciones gubernamentales locales fueron cascarones vacíos carentes autoridad, mientras las asambleas populares se convirtieron en instancias de las que emanó un nuevo mandato político. Esta es la historia del episodio.

Oaxaca: un modelo regional de dominio agotado

Oaxaca es un estado lleno de problemas sociales. Centro turístico del sur de México, sus enclaves de prosperidad están rodeados por villas de miseria sostenidas, en mucho, por las

* Editoralista de *La Jornada*.

remesas de los trabajadores migrantes. Mayoritariamente indígena y rural, es una de las dos entidades más pobres del país. En su territorio están a la orden del día luchas por la tierra, enfrentamientos con los caciques y los coyotes, disputas por los ayuntamientos, reivindicaciones étnicas, acciones por mejores precios para los productos del campo, y resistencia al autoritarismo estatal.

A ese atraso económico le corresponde un ejercicio de la autoridad arcaico, vertical y autoritario. Uno de los usos y costumbres del poder en Oaxaca establece que cada nuevo gobernador que toma posesión del cargo comienza su mandato reprimiendo. Demostrando así a los funcionarios que se van, a los políticos que se quedan y a la población que lo padece, que él es quien manda. Así lo hizo a su llegada Ulises Ruiz. Su unción como jefe del Ejecutivo oaxaqueño, el 1° de diciembre de 2004, fue bautizada con el agua bendita del castigo a sus opositores. Su ruta fue la misma por la que antes que él transitaron sus antecesores. Sin embargo, en esta ocasión los límites de la paciencia de los oaxaqueños fueron rebasados.

La explosiva situación política se polarizó en la entidad aún más a raíz de las elecciones para gobernador en 2004. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se fracturó durante la contienda electoral, y una facción, la de Diódoro Carrasco, se alió al gobierno de Vicente Fox. Gabino Cué, apoyado por el ex gobernador Diódoro Carrasco y por una coalición de la mayoría de los partidos de oposición, enfrentó a Ulises Ruiz, uno de los principales operadores de Roberto Madrazo, candidato del PRI a la Presidencia de la República, y quien triunfó por una mínima diferencia de votos en unas elecciones seriamente cuestionadas y con una abstención de 60%. La apretada victoria del abanderado del tricolor fue severamente cuestionada por los seguidores de Cué, quienes denunciaron un enorme fraude en su contra. La imposición se consumó, pero los agravios sobrevivieron.

Para gobernar, Ulises Ruiz necesitó mostrar fuerza. Debió conseguir desde el poder lo que no pudo obtener en las urnas. Nada más al asumir su cargo, tuvo que empeñarse a fondo para desinflar las protestas de Gabino Cué, su rival, y no encontró mejor recurso que amenazarlo con la cárcel; terminó pactando un entendimiento. El fantasma de un conflicto poselectoral en la entidad desapareció con rapidez.

El saldo de la violencia en el estado durante los primeros meses de su mandato fue escalofriante: encarcelamiento de dirigentes sociales, desalojo brutal de protestas ciudadanas, persecución policial de luchadores populares, detención de negociadores de movimientos sociales cuan-

do se dirigían a negociar con el gobierno, derramamiento de sangre en varios municipios, aplicación discrecional de la ley a insumisos.

Aún antes del inicio del movimiento, en Oaxaca la muerte tenía permiso: asesinatos, “suicidios” y accidentes carreteros de dirigentes sociales y funcionarios públicos se sucedían uno tras otro. César Toimil, pistolero al servicio de grandes propietarios de la tierra, ocupante de un rancho propiedad de Miguel Ángel Yunes, fue emboscado por sicarios en la presa La Capilla, en la región de Tuxtepec, junto con otras tres personas. Toimil, quien era dirigente nacional del Consejo Regional Obrero, Campesino, Urbano de Tuxtepec (Crocot), recibió ocho tiros y uno más de gracia en la frente. Acababa de participar en un mitin de apoyo a López Obrador.

El 14 de enero de 2006, Neguib Tadeo Manrique, alcalde de Ixtepec, inmensamente rico, hombre cercano al ex gobernador Jesús Murat, y cuatro personas más, fueron ejecutados por tres matones en una carretera. Recibieron 42 balas.

Álvaro Baños Díaz, militante del PRI y ex presidente de Pinotepa Nacional, se “suicidó” el 8 de marzo en el hotel Carmona. Miguel Ángel Cuéllar Aguilera, coordinador general de las Unidades Móviles de Desarrollo del gobierno de Oaxaca, y su chofer, fallecieron el 2 de mayo en un accidente automovilístico sobre la carretera Oaxaca-México. Cuéllar era pieza clave en el operativo electoral del PRI en las próximas elecciones.

El 11 de mayo de 2006, dirigentes del ala independiente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, críticos de su conversión en partido político, fueron emboscados. Los disidentes habían denunciado 10 días antes al diputado local de Unión Popular por corrupción y asesinatos. Adrián Bautista falleció.

Una semana después, apenas el 18 de mayo, el líder de la organización binacional Red Internacional de Indígenas Inmigrantes Oaxaqueños (RIIO), Moisés Cruz Sánchez, fue asesinado a balazos por dos sicarios en Mixtepec. La Confederación Nacional Campesina en la región lo había amenazado de muerte por apoyar a López Obrador.

Operador electoral privilegiado de Roberto Madrazo, el nuevo gobernador oaxaqueño quiso hacer de su estado un baluarte priísta en la sucesión presidencial, y para ello apostó por terminar con cualquier resistencia, fuera rival o “amiga”.

Con la oposición partidaria debilitada, el mandatario se propuso quitarse de encima la sombra de su antecesor, José Murat. El poder, en la mejor tradición priísta, no se comparte, y menos con un personaje nacido en la misma

cuna, como lo era Murat. La tranquilidad de su sucesor requirió, cuanto antes, deshacerse de su influencia en el estado.

Para imponer su autoridad en la sociedad oaxaqueña, Ulises Ruiz echó mano de la “experiencia” de sus antecesores. Un ejército de burócratas y caciques regionales se encargó de tomar en sus manos presupuestos y recursos institucionales para negociarlos a cambio de lealtad política. Indujo en municipios rebeldes el desarrollo de conflictos intercomunitarios. Propició la injerencia estatal en los ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres y que no simpatizan con el PRI, acelerando su desgaste. Y, lejos de disponerse a resolver los 52 problemas agrarios graves que han en la entidad, trató de utilizarlos en su favor.

Pero aunque las reglas no escritas del poder oaxaqueño eran las mismas desde hace décadas, la sociedad no lo era. Más de 30 años de luchas de resistencia, conquistas legales, autodefensa y obtención de gobiernos locales han formado un tejido asociativo de pueblos indios, coordinadoras campesinas, sindicato magisterial, coaliciones populares y artistas, que ha transformado las relaciones entre la administración pública y la sociedad civil en el estado. De manera que, lejos de provocar la desmovilización social con el uso de la fuerza, la criminalización de la disidencia provocó una explosión de descontento popular que no se vivía en la entidad desde el movimiento que en 1977 propició la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino.

Esta primavera de la auto-organización popular en pleno verano fue resultado, en parte, de la conjunción de varios factores: el enorme descontento ante el fraude electoral; la ruptura en el bloque dominante y los pleitos entre el mandatario estatal entrante y el saliente; la intolerancia en el trato del gobierno local hacia los alcaldes nombrados por usos y costumbres no afines al PRI; la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad de Oaxaca para realizar obras públicas innecesarias que justificaran el desvío de recursos públicos hacia la candidatura de Roberto Madrazo; la cerrazón gubernamental para atender demandas sociales; la emergencia de los barrios organizados de la capital y zonas conurbadas con graves problemas de urbanización, y una cultura asociativa de origen indígena; la cancelación de espacios democráticos y la intensificación de la represión.

Los intelectuales orgánicos de una sociedad rural

La protesta en Oaxaca comenzó como expresión de la lucha del magisterio de la entidad por un aumento salarial

por la vía de la revalorización por vida cara. No había en ello ninguna novedad con respecto a luchas similares protagonizadas en años anteriores. Su movilización arrancó en una fecha simbólica y tradicional: 15 de mayo, Día del Maestro; así lo han hecho desde hace años. Trató de utilizar, como lo ha hecho en cada sucesión presidencial desde 1982, la coyuntura electoral para aumentar su capacidad de presión.

El paro magisterial fue un movimiento legítimo. El costo de la vida en Oaxaca se ha incrementado dramáticamente, en parte por la presencia del turismo. Por la vía de la revalorización los maestros de la entidad pedían un incremento en el salario para paliar los efectos del aumento en la canasta básica. Esta demanda fue enarbolada desde 1979 por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en algunos estados, y fue negociada exitosamente en Chiapas.

En lugar de resolver las peticiones de los profesores, el mandatario estatal buscó enfrentarlos con la sociedad oaxaqueña. Lo hizo utilizando toda la experiencia autoritaria de los gobiernos del partido (PRI). Patrocinó una costosa campaña en la televisión local difundiendo un anuncio en el que un grupo de niños pedía a sus maestros que no fueran al plantón y regresaran a las aulas; propaló masivamente la idea de que el bajo nivel educativo de la entidad es culpa de los educadores. Convirtió una reunión de 310 presidentes municipales en un acto para legitimar una salida represiva contra el movimiento; azuzó a la iniciativa privada contra los mentores. Divulgó la especie de que el movimiento era una provocación de Elba Esther Gordillo contra Roberto Madrazo; y descontó a los paristas casi la mitad de su salario.

El malestar creció, y en lugar de sentarse a negociar, el gobernador mandó, el 14 de junio, a sus policías a desalojar por la fuerza a los mentores acampados en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Los educadores, después de la sorpresa inicial, se reagruparon, convirtieron el enojo y el miedo en coraje, y enfrentaron a la policía con piedras y palos, haciendo valer su superioridad numérica. La población los protegió, pues abrió las puertas de sus casas para resguardarlos; les dejó cubetas de agua en las aceras, y les lanzó trapos mojados desde ventanas y azoteas para que se protegieran del efecto de los gases lacrimógenos. Sin embargo, las fuerzas del orden destruyeron Radio Plantón, que había funcionado como la voz del movimiento. En respuesta, grupos de universitarios tomaron Radio Universidad y comenzaron a transmitir desde sus instalaciones. El gobierno federal no mandó a la PFP a hacer el trabajo sucio. La represión indignó a los maes-

tros y a otros ciudadanos oaxaqueños. El mandatario se ganó el repudio de muchas personas.

La represión salvaje del 14 de junio radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad. En lugar de buscar canales de solución, el gobierno federal se desentendió del conflicto y dijo que era un asunto local en el que no tenía injerencia.

La respuesta magisterial tenía una larga historia de resistencia. Los maestros oaxaqueños desterraron al *charrismo* sindical de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde el 1° de mayo de 1980. Ese día, durante la celebración del Día del Trabajo, se detonó un movimiento depurador que continúa vivo hasta nuestros días. Los profesores oaxaqueños tienen, pues, una experiencia de lucha ininterrumpida de 27 años. En ese tiempo han sido asesinados varios de sus dirigentes, se ha tratado de imponerles representantes, se les ha perseguido, se ha bloqueado la gestión de su mesa directiva, pero todo ha sido en vano. Han sobrevivido a cinco presidentes de la República, a varios gobernadores y a los cacicazgos sindicales de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo. Su cohesión sindical les ha permitido enfrentar con éxito todos los intentos que desde el poder se han hecho para dividirlos.

Más allá de su militancia gremial, los trabajadores de la educación de Oaxaca tienen un amplio camino de relación con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad con un peso tan importante del mundo rural como es Oaxaca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados. Todos los partidos políticos han obtenido del magisterio cuadros políticos.

Tal es la responsabilidad que sienten los profesores hacia sus comunidades, que la mayoría de ellos dejaron por un par de semanas la ocupación de la capital oaxaqueña para culminar el ciclo escolar de 2006 en sus comunidades. Terminadas las clases regresaron a la ciudad para seguir adelante con su plan de acción: la ciudad de Oaxaca fue tomada por ellos.

El reclamo de los maestros encontró rápidamente eco en una amplísima parte de la sociedad oaxaqueña que se sumó a él. Agraviados tanto por el fraude electoral mediante el cual Ulises Ruiz se convirtió en mandatario, como por la violencia gubernamental en contra de una multitud de organizaciones comunitarias y regionales, centenares de miles de oaxaqueños tomaron las calles y más de 30 ayuntamientos.

Los opositores al movimiento dentro de las filas del magisterio, entre los que participaban antiguos líderes seccionales, como el ex secretario general, Alejandro Leal, integraron un Consejo Central de Lucha e intentaron formar una sección sindical paralela. En esta intentona rupturista estaba la mano del gobierno estatal y de Elba Esther Gordillo. Sin embargo, las cosas no resultaron como el gobierno esperaba. El intento de modificar la Ley del ISSSTE — hecho realidad meses después— puso a los trabajadores de la educación en estado de alerta entre enero y abril del año 2006, reforzó su unidad e impulsó la disposición hacia la organización de una gran protesta nacional. La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño, instancia en la que se coordinan los representantes de las delegaciones sindicales con sus dirigentes estatales para decidir el rumbo de su lucha, se cohesionó como en sus mejores momentos.

Detrás de esta respuesta se encuentra, entre otros factores, principalmente uno: la existencia de un nuevo magisterio. En el movimiento hay muchos jóvenes, mucha gente nueva alejada de las viejas prácticas sindicales, pero formada en los principios rectores de la lucha democrática. Las mismas marchas, antes casi silenciosas y rutinarias, se transformaron en espacios donde se vuelca la creatividad y la imaginación popular; hubo una especie de renacimiento de la combatividad.

El magisterio tiene una cultura y una práctica sindical que hace muy difícil la cooptación de sus dirigentes. En la sección 22 del SNTE las cúpulas no mandan, porque las bases no las dejan mandar. Por el contrario, deben obedecer las decisiones de la asamblea estatal, instancia organizativa en la que participan el comité seccional y los secretarios generales de todas las delegaciones sindicales del estado. El movimiento orienta su acción a partir de 20 principios rectores de claro contenido democrático. Los delegados que asisten a la asamblea van amarrados a lo que sus escuelas han acordado, y si rompen ese acuerdo pueden ser destituidos.

Este funcionamiento democrático de 27 años de antigüedad fue lo que impidió la decisión de promover el levantamiento del paro en los primeros meses del conflicto. Fue, además, lo que facilitó que la sección sindical se mantuviera unida, a pesar de sus diferencias internas.

Una parte importante de la sociedad oaxaqueña se solidarizó con los maestros. No es inusual la participación de ellos en esos movimientos. Más aún, muchos han sido organizados y dirigidos por mentores. El gremio magisterial es la única fuerza social democrática con presencia en todo el territorio; es la única organización capaz de hacer

sentir de manera coordinada y simultánea su peso político en todos los municipios de la entidad.

Los profesores oaxaqueños laboran en condiciones precarias, con muy pocos recursos pedagógicos. Sus alumnos llegan a las escuelas sin un bocado en el estómago y deben abandonar los cursos para ayudar a sus familias en las labores del campo. No son pocos quienes apenas conocen a sus padres, porque han emigrado a Estados Unidos. Las aulas están pésimamente equipadas. Y para llegar a las comunidades donde laboran deben invertir horas y dinero en trasladarse por caminos que sólo existen en los informes oficiales. En estas condiciones, ha sido una constante en la historia reciente que los maestros se identifiquen con las comunidades en las que trabajan, y se vuelvan no sólo luchadores dentro de su gremio, sino voceros de las demandas comunitarias también.

La protesta magisterial se convirtió en 2006, como en sus mejores momentos, en el canal de expresión del enorme descontento popular existente en la entidad. Padres de familia y profesores tomaron las presidencias municipales en las que los ediles actúan contra el movimiento. Pinotepa Nacional, Miahuatlán, Salina Cruz, Espinal, Tehuantepec e Ixtepec fueron algunas de las alcaldías ocupadas.

El queso oaxaqueño

La *política oaxaqueña* puede ser tan enredada como su célebre queso. Es difícil encontrar en otras regiones del país la complejidad con la que se sobreponen allí los poderes fácticos y las instituciones políticas. La enorme lista de mañanas para negociar y gobernar de la autoritaria clase política local ha alcanzado una mezcla de sofisticación y crudeza sorprendente. La forma en la que, en el acto de gobernar la entidad, los funcionarios en turno utilizan la concesión, la corrupción y la represión es de una complejidad notable.

Las luchas sociales en la entidad se desplegaron a partir de esta complejidad. La resistencia indígena encontró la forma de conservar lo propio resimbolizando lo ajeno. Y al hacerlo generó una cultura política donde nada es como parece ser y marcó a fuego las formas de hacer política en la entidad. Los políticos profesionales, por su parte, se han adaptado a ese continuo forcejeo.

Guillermo Bonfil proporcionó una clave fundamental para entender esta dinámica. En *México profundo* escribió: “Vencidos por la fuerza, los pueblos indios, sin embargo, han resistido: permanecen como unidades sociales diferenciadas, con una identidad propia que se sustenta en una cultura particular de la que participan, exclusivamente, los

miembros de cada grupo. Casi cinco siglos de dominación, de agresión brutal o sutil contra la cultura de los pueblos indios, no han logrado impedir la sobrevivencia histórica fundamental del México profundo. Los caminos de la resistencia forman una intrincada red de estrategias que ocupan un amplio espacio en la cultura y en la vida cotidiana de los pueblos indios”.

La resistencia, entendida como la lucha de los sectores subalternos para no ser absorbidos por sus dominadores, ha sabido encontrar en estos enredos trincheras para su desarrollo. Las modalidades de la resistencia indígena han permeado al conjunto de la sociedad oaxaqueña. Expresión de ello son los centenares de organizaciones de base que existen en el estado.

La sociedad oaxaqueña está altamente organizada en agrupaciones etnopolíticas, comunitarias, agrarias, de productores, civiles, sindicales, de defensa ambiental y de inmigrantes. Ha construido sólidas redes trasnacionales permanentes. Ese denso tejido asociativo, forjado en más de tres décadas de lucha y con una fuerte vocación autónoma, rompió masivamente en los últimos tres meses con el control del PRI y con los mediadores políticos tradicionales. Los métodos tradicionales de dominio gubernamental, basados en una combinación de cooptación, negociación, división, manipulación de demandas y represión, se agotaron. El modelo saltó por los cielos hecho pedazos.

Esa resistencia tuvo que gestar nuevas formas para recrearse en el contexto de una urbanización caótica y salvaje, como la que han vivido la ciudad de Oaxaca y sus poblados conurbados. Una urbanización que devora las tierras comunes, seca los pozos, contamina los mantos acuíferos, llena de basura los campos, al tiempo que provee de empleos precarios, vivienda cara y servicios deficientes a los expulsados de las comunidades. Para subsistir, los nuevos indios urbanos trasladaron a la polis su *comunalidad*, su voluntad de ser colectivos. Fue por ello que la revuelta oaxaqueña tuvo en los barrios pobres de la capital del estado, en sus mujeres y jóvenes, un actor central. La Comuna oaxaqueña se alimentó e inspiró de la *comunalidad* indígena.

Esta resistencia ancestral, adaptada a las nuevas condiciones urbanas, es lo que explica, en mucho, que el movimiento popular para exigir la caída de Ulises Ruiz no cesara, a pesar de la salvaje represión que vivió. Ni la presencia masiva de la Policía Federal Preventiva (PFP), ni los convoyes de la muerte, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni las detenciones arbitrarias de dirigentes sociales y ciudadanos de a pie, ni la tortura, ni el soborno a algunos líderes, ni las campañas de satanización lograron frenar la protesta.

La APPO

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social en México. Se trata de una asamblea de asambleas nacida el 17 de junio de 2006 en el marco de la sublevación popular contra Ulises Ruiz. Participaron en su formación 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos con una demanda única: la salida del gobernador.

Las asambleas populares son el espacio donde tradicionalmente deliberan y toman acuerdos las comunidades oaxaqueñas. En muchos municipios en ellas nombran a las autoridades locales; y en gran cantidad de organizaciones sociales son el lugar desde el cual se decide el rumbo de la lucha y se escoge a los dirigentes.

Oaxaca es un estado pluriétnico y multicultural. Viven allí 16 pueblos indios. Las ocho regiones y los 570 municipios que la integran son el espacio territorial que da identidad y horizonte de lucha a gran diversidad de organizaciones etnopolíticas, comunitarias, campesinas, populares y civiles.

La APPO sintetiza la cultura política local nacida de las asambleas populares, el sindicalismo magisterial, el comunismo indígena, el municipalismo, el extensionismo religioso, la izquierda radical, el regionalismo y la diversidad étnica de la entidad. Expresa, además, las nuevas formas asociativas que se crearon en Oaxaca a raíz del levantamiento popular pacífico: las organizaciones de los barrios pobres de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, las redes juveniles libertarias y las barricadas.

En el entorno de la APPO, pero más amplio que ella, se ha creado un movimiento sociopolítico conocido como la Comuna de Oaxaca. Ella es la expresión organizativa autónoma de la resistencia popular, el embrión de un poder distinto. Ese “otro poder” en construcción se expresa en la creación y consolidación de la Policía del Magisterio Oaxaqueño y del Honorable Cuerpo de Topiles. Allí está contenida la voluntad de transformación política profunda de una parte muy importante de la sociedad oaxaqueña.

La Asamblea plantea ir democratizando a las instituciones mientras trabaja en una nueva constituyente que elabore una nueva Constitución. Busca transformar la revuelta popular en una “revolución pacífica, democrática y humanista”. En su congreso rechazó la posición que afirmaba la importancia de que “la APPO negocie y vaya ocupando espacios de decisión y de poder en las instituciones vigentes”.

La APPO no es un partido político ni el movimiento de masas de alguno de ellos. No aspira a convertirse en uno. Tampoco es creación de una guerrilla, o de alguna iglesia u ONG. Aunque en su interior participan muchas corrientes políticas no está dirigida por ninguna en particular. Unas y otras se hacen contrapeso.

La APPO no es un pacto de líderes políticos, sociales o religiosos. No es una organización de cabecillas. No hay en su conducción una figura que destaque sobre las demás. Es un movimiento de bases. Su dirección está integrada por 260 personas. Pretender explicar su nacimiento como producto del retiro gubernamental de subvenciones a varios dirigentes locales es un buen argumento propagandístico contra el movimiento, pero una torpeza analítica.

La APPO es imposible de comprender al margen de la sección 22 del SNTE. La forma en la que los activistas magisteriales se han asociado para actuar dentro del sindicato se reproduce en el movimiento social en el que actúan. Dos corrientes magisteriales, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Corriente Democrática del Magisterio (Codema), con gran influencia en la sección 22, fueron, al mismo tiempo, muy influyentes en la APPO.

Sin embargo, a la rica e inédita experiencia del movimiento no le correspondió un lenguaje novedoso. Su práctica apenas ha comenzado a sistematizarse. En su interior coexisten distintos discursos, por lo que era común en las protestas encontrar simultáneamente contingentes con mantas con la hoz y el martillo, jóvenes antiautoritarios con la simbología ácrata, y comunidades eclesiales de base con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Esta diversidad lingüística refleja tanto proyectos diferentes sobre las vías para la transformación política como una enorme dificultad para pensar y nombrar lo nuevo. A pesar de ello, hay una práctica unitaria.

La Comuna de Oaxaca

Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero inmediatamente después de los comicios presidenciales, la situación dio un vuelco de 180 grados y la coyuntura inmediata del país fue atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de “una sola calle”, como lo bautizó Ulises Ruiz, definió grandes decisiones políticas nacionales.

Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron a las protestas magisteriales en la entidad y a las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían “aroma de mujer”, insinuando que detrás

de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo; y no fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.

Después de julio, el conflicto poselectoral dio vida a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a costas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesitó del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El *tricolor* puso precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.

La protesta sumó muchas voluntades. Tan sólo en junio de 2006 se efectuaron en la capital del estado cuatro megamarchas masivas. En un estado con poco más de 3 millones de habitantes, el 2 de junio –según los organizadores– tomaron las calles 150 mil personas; y el día 7 lo hicieron 250 mil, exigiendo, por primera vez, la renuncia de Ulises Ruiz. El día 16 marcharon 500 mil; y el 28 de ese mes protestaron 800 mil almas.

El 1° de agosto de 2006, una comisión de mujeres que buscaba un espacio para difundir la realidad del movimiento en el canal de la televisión pública del estado, se hizo del control de la estación, y durante 22 días transmitieron una programación alternativa. Sin embargo, las emisiones se suspendieron cuando un grupo de pistoleros al servicio del gobernador destruyó a balazos antenas y consolas de transmisión.

La sociedad oaxaqueña respondió *tomando* las 14 radiodifusoras de la entidad para divulgar su verdad. La radio se convirtió en el instrumento que enlazó a los barrios organizados, convocó y movilizó a la población.

El 20 de junio de 2006 se fundó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La naciente agrupación retomó y desarrolló las formas organizativas presentes en las comunidades del estado: las asambleas como espacios de encuentro, comunicación, información, análisis, reflexión y toma de acuerdos; los consejos (de ancianos, caracterizados o principales) como fuente de autoridad y orientación política; y las comisiones como mecanismo asociativo para cumplir tareas específicas.

Durante cinco meses la población insubordinada hizo imposible que el gobierno local funcionara. Bloqueó el Congreso y el palacio de gobierno, las secretarías de Finanzas y Economía y el Poder Judicial. La APPO se encargó de mantener el orden de la ciudad. En varios municipios los pueblos *tomaron* las alcaldías.

Ante la represión de policías vestidos de civil, de paramilitares y de pistoleros contra los ciudadanos en lucha, y las *caravanas de la muerte*, formadas por convoyes motorizados desde los que se disparaban armas de fuego contra civiles, los barrios respondieron levantando barricadas nocturnas. Su objetivo inicial era garantizar la seguridad de los vecinos, pero con el paso de los días se convirtieron en espacios de encuentro, educación y discusión política.

Durante meses, al caer la noche, la ciudad de Oaxaca cambiaba. Con los últimos rayos de luz aparecían en barrios y avenidas cientos de barricadas. Los vecinos organizados tomaban las calles, encendían fogatas, colocaban piedras y asumían el control de la circulación de vehículos y personas. A partir de ese momento, moverse por la ciudad resultaba muy difícil.

En las barricadas se comentaban las últimas noticias, se conversaba, se preparaba café, se cocinaba, se realizaban asambleas, y se escuchaba la estación de radio de la APPO. Así se garantizaba la seguridad pública en la oscuridad nocturna. Los barrios pobres se protegían de la delincuencia y de los ataques de los pistoleros al servicio de Ulises Ruiz. Se hacía sentir el control de los ciudadanos sobre su territorio.

La comunicación radial independiente era el hilo que enhebraba los centenares de focos de resistencia aparentemente desarticulados en calles y hogares. La radio ocupada informaba de los ataques de sicarios y policías vestidos de civil, y llamaba a los ciudadanos a movilizarse y a organizar la defensa. Transmitía a teléfono abierto llamadas de solidaridad y apoyo; difundía programas para niños con historias ejemplares; emitía segmentos informativos sobre la biopiratería y la defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas; comunicaba al movimiento consigo mismo.

Desde radio APPO (www.asambleapopulardeoxaca.com) se emitían canciones de la Guerra Civil española. *¡No pasarán!* era una especie de segundo himno del movimiento, después del *¡Venceremos!*, adaptado y adoptado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con los primeros rayos de luz del día, las pequeñas barricadas de los barrios se levantaban, sólo permanecían las más importantes. El campamento principal del movimiento en el centro de Oaxaca se llenaba de actividades. Grupos solidarios entregaban víveres y comida preparada. Las brigadas móviles de la APPO *tomaban* camiones y edificios públicos, y conminaban a los funcionarios y empleados a abandonar los edificios donde despachaban. Los altos mandos de la administración local se movían a salto de mata. Se

reunían en hoteles y casas particulares, siempre temerosos de que los inconformes llegaran a desalojarlos.

En Oaxaca los ciudadanos perdieron el miedo, ese elemento social básico para que funcione un sistema de dominación. Cuando los pistoleros gubernamentales disparaban contra la multitud o contra las estaciones de radio, la gente no huía, sino que se lanzaba contra los agresores; y a convocatoria de la radio centenares o miles de personas se concentraban en cuestión de minutos en el lugar del ataque para perseguir a los responsables.

En cambio, las policías locales tenían miedo, y temían a los ciudadanos organizados y a su ira; tenían pavor a la respuesta decidida de la gente desarmada.

Durante meses, el movimiento asumió el control político de la ciudad de Oaxaca. Si lo consideraba pertinente, bloqueaba la entrada a los hoteles de lujo del centro, el aeropuerto local, obstruía el tráfico de avenidas, e impedía la entrada a edificios públicos y al Congreso del estado.

En contra de lo que se dijo, y a pesar de la indudable importancia que desempeñó el sindicato magisterial, no se trató de un mero movimiento gremial. En la lucha encontraron un lugar y una identidad aquellos que no tienen futuro. Los jóvenes punk y los desempleados, los excluidos que no han emigrado a Estados Unidos, al valle de San Quintín o a la periferia de la ciudad de México, han hallado en la protesta un espacio de dignidad y la posibilidad de hacerse de un lugar en el mundo. Su radicalidad fue notable, como también su arrojo.

El tejido fino de la sublevación oaxaqueña estuvo integrado por una convergencia de pobres urbanos, jóvenes sin futuro, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, gremios, ONG y maestros democráticos, con su respectivo memorial de agravios.

La guerra sucia

En sus inicios, las protestas coincidieron con los comicios federales. Después de amagar con el boicot, los inconformes acordaron promover el voto de castigo al PRI y al PAN, y el 2 de julio les propinaron a ambos una severa vapuleada. El tricolor fue barrido, mientras que la coalición Por el Bien de Todos ganó nueve de las 11 diputaciones y las dos senadurías de mayoría en disputa. Y si el sol azteca perdió dos posiciones fue por sus divisiones internas y por la debilidad de sus candidatas. A pesar de que el gobernador había ofrecido que daría a Roberto Madrazo un millón de votos, tuvo que conformarse con poco más de 350 mil, esto es, 180 mil votos menos que los ganados por López Obrador.

Para tratar de paliar la crisis, Ulises Ruiz cambió a varios funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Gobierno, y los sustituyó con integrantes de los grupos del PRI a los que había desplazado del gobierno estatal. La maniobra no tuvo mayor efecto.

En la misma dirección, propuso en una reunión de los gobernadores priístas reconocer a Felipe Calderón como ganador de la contienda electoral. El gobierno federal, necesitado de aliados para enfrentar las protestas contra el fraude electoral, respondió sosteniendo al gobernador.

Con el paso del tiempo la situación se agravó. El 22 de julio un grupo de 20 desconocidos disparó con armas de alto poder contra las instalaciones de Radio Universidad, pues ésta, conducida por el movimiento, se había convertido en un formidable instrumento de información y movilización social. Ese mismo día, varios desconocidos aventaron bombas molotov contra la casa de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE. Y días después fueron lanzadas bombas molotov contra el domicilio de Alejandro Cruz, dirigente de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos.

La violencia física dirigida a opositores no es una novedad en Oaxaca. Es parte de la cultura política de la clase estatal. Organizaciones campesinas, comunidades indígenas, el sindicato magisterial y ciudadanos en la entidad han sufrido persecución política y abusos policiales desde hace décadas. En los años ochenta Amnistía Internacional elaboró un amplio informe documentando de las violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales de Chiapas y Oaxaca. Cacicazgos, desapariciones forzadas, asesinatos de disidentes políticos y detenciones arbitrarias han sido instrumentos habituales del gobierno en las diferentes administraciones estatales.

La lista de las atrocidades cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento magisterial y la APPO creció día con día. Junto a la ingobernabilidad del estado emergió una grave crisis de derechos humanos.

Asesinatos de ciudadanos inconformes a manos de sicarios y policías vestidos de civil, disparos de armas de fuego en contra de periódicos y estaciones de radio independientes; secuestro y tortura de dirigentes sociales por brigadas paramilitares, amenazas de muerte, centros de detención clandestinos, incendio de autobuses por grupos de porros ligados a autoridades priístas locales, y detención arbitraria sin órdenes de aprehensión de líderes populares, fueron algunas de las agresiones cometidas en contra del movimiento civil que exigía la renuncia del gobernador de la entidad.

La novedad de la violencia local contra los opositores fue que se realizó en contra del más importante y vigoroso movimiento social en la entidad en décadas, y que se hizo, en un primer momento, “extraoficialmente”. Esto significa que la mayoría de los actos represivos fueron ejecutados por policías estatales vestidos de civil, que no reconocían serlo, y por paramilitares. En ocasiones contaron con el apoyo de presidentes municipales de filiación priísta.

En Oaxaca se vivió un nuevo episodio de la *guerra sucia* que sacudió a nuestro país entre los años sesenta y los ochenta, y que provocó la desaparición de mil 200 personas. Se trata de una *guerra sucia* porque el poder policiaco y judicial fue utilizado de manera informal e irreglamentado contra el movimiento popular. En lugar del uso de la violencia legítima del Estado se asistió al uso de la violencia ilegal e ilegítima por parte del gobierno estatal, con la complicidad del gobierno federal, quien permitió que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos. En lugar de la negociación política, las autoridades hicieron uso creciente de tácticas y procedimientos bélicos para tratar de frenar la desobediencia ciudadana.

La movilización en contra del gobernador, explícitamente encuadrada en el marco de la desobediencia civil, siguió caminos claramente pacíficos. En ningún momento los integrantes de la APPO utilizaron armas de fuego en sus acciones.

La nueva *guerra sucia* se convirtió en el último recurso de una clase política arrinconada para recuperar la cadena de mando-obediencia.

Oaxaca, magisterio y lucha armada

Con poca imaginación, el gobierno estatal quiso explicar el descontento social recurriendo al guión de siempre: la inconformidad ciudadana —dijo— era sólo una fachada de organizaciones armadas.

Lizbeth Caña, procuradora general de Justicia de Oaxaca, informó a la prensa nacional que las acciones de protesta del movimiento popular eran “actos de guerrilla urbana y subversivos”. Y Enrique Jackson, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que era evidente la presencia de grupos armados. La acusación tuvo como antecedente el reiterado intento de las autoridades estatales de asociar a los dirigentes magisteriales de la entidad con grupos violentos.

Suponer que el movimiento oaxaqueño fue organizado por un grupo político-militar es una insensatez. No hay organización partidaria ni político-militar en México capaz de facilitar o conducir un levantamiento como el oaxaqueño.

En la protesta convergieron centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos ciudadanos y organizaciones políticas con un objetivo central: la desaparición de poderes en la entidad. La sección 22 del SNTE fue, en sus inicios, la columna vertebral que estructuró el movimiento. Pero, más adelante, a pesar de su enorme importancia numérica y de su capacidad de convocatoria y movilización, fue una isla más en el archipiélago anti Ulises Ruiz.

Desde su constitución como una tendencia sindical democrática, dentro de la sección 22 participan maestros de las más diversas corrientes políticas; afirmar que grupos radicales se han infiltrado en el magisterio oaxaqueño es una estupidez. Los profesores que integran esas organizaciones han estado allí desde 1980, y tienen una larga historia de relación con organizaciones campesinas e indígenas, en la que funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad; su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados.

Ciertamente, en los últimos años la relación entre profesores y padres de familia en Oaxaca se había deteriorado. En algunos casos, el ausentismo y la falta de compromiso profesional alejaron a los maestros de las comunidades; en otros, la falta de respeto a las dinámicas de la vida indígena enfrentó a unos con otros. Pero ese desgaste en la relación se solucionó cuando el magisterio enarboló la demanda de destituir a Ulises Ruiz. Eran tantos y tan profundos los agravios del mandatario hacia los pueblos, que éstos encontraron en la movilización magisterial la vía para deshacerse de él.

La vinculación del magisterio democrático con los sectores populares, trascendiendo la mera solidaridad, tiene dos antecedentes históricos: la escuela socialista y el maestro rural formado durante el cardenismo. Un informe de la época señalaba: “los maestros han formado en el pueblo mexicano una fuerte conciencia de la trascendencia social que tienen las disposiciones de nacionalización de los ferrocarriles, reparto ejidal de la zona henequenera en Yucatán, expropiación de los bienes de las compañías petroleras”¹.

El lazo con las luchas sociales se mantuvo vivo en el corazón mismo del sistema de formación de mentores: las escuelas normales, y más en concreto, en la versión rural de éstas. A las normales rurales (ahora en desaparición)

¹ *Memorias 1938*, vol. I. Informe de la Oficina Técnica de Escuelas Rurales.

asisten los hijos de los campesinos con la esperanza de cultivarse y de adquirir una profesión. Mientras estudian tienen que sobrevivir con una beca miserable. Origen de clase, dieta raquítica y formación política se convierten, con frecuencia, en votos de compromiso y lucha a favor de las causas populares. Aunque muchos egresados son absorbidos por la vida “institucional”, otros se mantienen en la brega.

Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los legendarios guerrilleros guerrerenses que organizaron levantamientos armados contra el gobierno mexicano, fueron maestros. No han sido los únicos profesores que han participado en movimientos armados, pero suponer que éstos tienen la capacidad de conducir un movimiento tan masivo, complejo y plural como es el de la sección 22 del magisterio o el de la APPO, es un absurdo.

Ciertamente las guerrillas y la resistencia armada han estado presentes en Oaxaca desde hace décadas. La sublevación mixe en contra del cacicazgo de Luis Rodríguez en 1959, las acciones del Güero Medrano en Playa Vicente, y la ofensiva del Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace 10 años en Huatulco, Tlaxiaco y la ciudad de Oaxaca, son algunos de los incidentes más conocidos de esta resistencia.

Sin negar la existencia de esta realidad, la lucha oaxaqueña respondió a otras motivaciones y dinámicas. No hay organización armada ni partido político capaz de estimular la auto-organización ciudadana autónoma que existe en la entidad, y que es su sello distintivo. Como señaló el especialista Jorge Lofredo, la dinámica del conflicto fue política y no militar.

Brad Will y el viernes sangriento

A finales de octubre y durante noviembre de 2006, ante la cercanía del cambio de poderes en el país, se puso en marcha un *operativo* para desmantelar la insumisión popular de manera violenta. El 26 de octubre Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del magisterio, anunció el regreso a clases de los maestros en huelga.

El periodista Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca; no fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento, en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita López. Fallecieron también Esteban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz, y fueron heridas 23 personas.

Ese día, a partir de las cuatro de la tarde, el gobierno del estado desató la violencia en contra de quienes pe-

dían la salida del gobernador. Grupos de francotiradores, policías y pistoleros dispararon con armas de alto calibre sobre ciudadanos desarmados en, al menos, 15 puntos claves de la ciudad de Oaxaca. La represión se concentró en tres lugares en los que se habían instalado barricadas: Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca; Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec. Ni agentes ni sicarios resultaron heridos. Todas las víctimas eran parte del movimiento contra el mandatario estatal.

El homicidio de Brad Will ocurrió en Santa Lucía del Camino. Un grupo de policías y autoridades municipales le disparó a 30 metros de distancia, mientras el documentalista grababa con su cámara el enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los funcionarios públicos y gendarmes sin uniforme.

La agresión fue salvaje. En Coyotepec, Esteban Zurita López fue ultimado de un balazo. Su cuerpo quedó tirado a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados. A Emilio Alonso Fabián una bala le atravesó el corazón mientras trataba de huir. A varios maestros los machetearon. “Esa gente —dice uno de los testigos refiriéndose a los sicarios— iba camuflada como el pasto, parecíamos conejos a los que cazaban”.

Ese mismo viernes el gobierno del estado señaló que la señora Eudocia Olivera había muerto a bordo de una ambulancia por culpa de las barricadas. Nunca informó a qué institución pertenecía la ambulancia, la causa de la muerte, ni el hospital al que era trasladada. La Cruz Roja negó que sus ambulancias hubieran atendido ese servicio, y Urgencias Médicas, única que brinda servicio privado de traslado de enfermos, tampoco la atendió.

El Congreso de Oaxaca publicó desplegados en periódicos estatales exigiendo la intervención del gobierno federal y de la PFP para restablecer el “estado de derecho”. Dos días después del *operativo* policiaco y paramilitar, en medio de un fuerte escándalo mediático, propiciado en mucho por el fallecimiento del reportero estadounidense, entró a la ciudad de Oaxaca la Policía Federal Preventiva.

Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, y suboficial de la policía municipal, respectivamente, presuntos asesinos de Brad, fueron detenidos en un primer momento.

La prensa nacional y la cámara del documentalista asesinado captaron imágenes de estas personas disparando contra el occiso. Sin embargo, a principios de 2006 quedaron libres por “desvanecimiento de datos”. Ni siquiera se

les interrogó y enjuició por el delito de actividades parapolicíacas y por portación ilegal de armas.

Arteramente, a mediados de noviembre, el gobierno del estado hizo correr la versión de que los homicidas del reportero de Indymedia fueron dos activistas de la APPO que se encontraban a dos metros de distancia suya; no hay una sola evidencia sólida que respalde esta hipótesis. La justicia oaxaqueña ni siquiera se preocupó por encarcelar un tiempo a los criminales que ultimaron a las otras víctimas del viernes sangriento. Y es que, por lo visto, para ella la vida de humildes profesores y ejidatarios no vale siquiera una simulación.

El 28 de octubre de 2006, Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián, indígena zapoteca, profesor de primaria de la zona de Pochutla, encabezó con un ramo de flores en el brazo izquierdo el cortejo fúnebre para enterrar a su marido. La noche anterior, debió enfrentar sola a la burocracia para que le entregaran el cuerpo. El séquito partió del centro de la ciudad rumbo a Candelaria, su pueblo, en la región de Los Loxichas. En el zócalo de la capital oaxaqueña los dirigentes de la APPO le rindieron homenaje, mientras todas las voces entonaban *Dios nunca muere*.

A finales de abril de 2007, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, escribió: “Las investigaciones realizadas en México sobre la muerte de Will no parecen haber progresado en absoluto, y tampoco parece que haya un esfuerzo concertado para resolver el caso. Esta falta de avances es preocupante”. Casi un año después de sus palabras, la situación es exactamente igual o peor.

Kathy Will, madre de la víctima, dijo: “Estamos desilusionados por la falta de una investigación neutral, objetiva y legítima sobre la trágica muerte de Brad. La investigación inicial de las autoridades locales fue mala, prejuiciada e ilógica en sus conclusiones”.

Un año después del viernes sangriento, los maestros oaxaqueños tomaron las calles para honrar a sus muertos. Con ellos estaba Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián. Miles de trabajadores de la educación marcharon el 27 de octubre para recordar los homicidios, exigir justicia y mostrar que no han sido derrotados. En Cal y Canto, donde fue baleado Brad, los vecinos instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, veladoras y flores.

Aplastar el levantamiento

Oaxaca en 2006 como Sonora en 1902. A comienzos del siglo XX el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó la enésima

rebelión de los yaquis deportando a los indios prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A comienzos del siglo XXI, la administración de Vicente Fox respondió a la sublevación oaxaqueña enviando a 141 insumisos detenidos al penal de San José del Rincón en Nayarit.

Vicente Fox terminó su sexenio con las manos llenas de sangre. “Se acabó la tolerancia” en Oaxaca, dijo el general Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes, junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco. Sus perros tomaron la calle. Se lanzaron gases lacrimógenos, golpearon con lujo de violencia, detuvieron sin órdenes de aprehensión, invadieron viviendas sin autorización, destrozaron propiedades, ocuparon hospitales y clínicas, impidieron el libre tránsito de las personas, y ofendieron sexualmente a las mujeres.

El 27 de octubre se trasladó a la ciudad de Oaxaca a la Policía Federal Preventiva (PFP). El 2 de noviembre la población rechazó el intento policiaco por remover las barricadas que resguardaban la universidad. Las imágenes de las siete horas de enfrentamiento entre los robocops *made in Mexico* y los estudiantes y colonos oaxaqueños que defendieron la universidad el Día de Muertos, dieron la vuelta al planeta. La policía mexicana fue derrotada por un levantamiento popular y los medios de comunicación fueron testigos.

Sin embargo, el 25 de ese mes la represión se cebó sobre los ciudadanos en lucha, mientras se prendía fuego a edificios públicos en los que se encontraba documentación comprometedor para Ulises Ruiz. Felipe Calderón tomó posesión como presidente de la República con un movimiento a la defensiva por la violencia en su contra: muertos, desaparecidos, encarcelados, golpeados y más de 500 órdenes de aprehensión.

En las calles los jóvenes fueron detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes. Los presos fueron maltratados, torturados y confinados con reos comunes, y no se permitió que sus defensores jurídicos y familiares los visitaran. Y, como en el porfiriato, fueron deportados.

¿Por qué esta represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Qué sucedió que agotó la “tolerancia” de las autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura negociación en

condiciones favorables. Y con presos y perseguidos supuso que el arreglo con los insumisos sería más fácil y barato. Reclamó y obtuvo que fuera la administración saliente y no la entrante la que pagara el precio y el descrédito de la represión. En suma: que le limpiara el camino.

Sin embargo, la presencia masiva de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre, no impidió que las protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad; no desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su unidad interna.

A pesar de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se encontraba relativamente contenido. No se habían restablecido la ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad, pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto relativamente administrado. Ese *status* resultaba, sin embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.

¿Realizó el movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No. La manifestación que antecedió a la ofensiva represiva fue absolutamente pacífica. Fue, evidentemente, una demostración de fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de atacar provino de la PFP. Fueron elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras a los manifestantes y luego gases lacrimógenos y proyectiles; fueron ellos quienes comenzaron la agresión.

¿Perdieron los mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje: tres muertos, más de 100 heridos y 221 detenidos.

Y con ellos, protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos de civil al servicio de Ulises Ruiz: dispararon y secuestraron a ciudadanos indefensos, agredieron a quienes en la estación de autobuses ADO esperaban su transporte; se dedicaron a lo que han hecho durante los últimos meses: sembrar terror.

Simultáneamente, Radio Ciudadana, conocida popularmente como “Radio Patito”, la estación *pirata* de los seguidores del gobierno estatal, llamó a prender fuego a la casa de algunos destacados dirigentes del movimiento popular. No era broma. El domingo 26 de noviembre las oficinas de Flavio Sosa, uno de los más conocidos voceros de la APPO, fueron incendiadas. Por supuesto, ni la PFP ni la policía estatal lo evitaron.

“Esto se está normalizando”, dijo Ulises Ruiz. “No habrá perdón”, advirtió. Como candidato a gobernador del estado, Ulises se presentó como un “hombre de unidad”, pero le faltaron tres letras: Ruiz es el político de la “impunidad”.

APPO, PRD y elecciones en Oaxaca

Entre las recetas que Jesús Murat asegura haber puesto en práctica para controlar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, está el regalar a sus dirigentes una camioneta. “No hay pierde —dice—: el grupo que se queda sin nada se pelea a muerte con el que agarra la camioneta. Los que ganan te deben un favor. Los otros se la mientan a sus compañeros. Matas dos pájaros de un tiro...”

No hay novedad en la prescripción de esta medicina priísta para el control de la oposición partidaria. Los pleitos entre las distintas facciones que forman el PRD en Oaxaca son tan antiguos como el partido mismo, y han sido recurrentemente utilizados por el poder. Entre ellas todo es motivo de pelea: las candidaturas, las dietas, las prerrogativas de ley, los puestos de dirección. La mezquindad de muchos de sus dirigentes es proverbial. Su trayectoria política pareciera resumirse en una frase: “antes muertos que vivir fuera del presupuesto”.

Esta sordidez política quedó de manifiesto durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Mientras sus militantes de base y simpatizantes exigían en las calles la destitución de Ulises Ruiz, los legisladores locales del PRD votaron leyes para favorecer al sátrapa. Sólo por la presión de algunos dirigentes nacionales del partido los diputados regularon.

Esta tacañería se hizo evidente también en los comicios del 5 de agosto de 2007 para renovar la legislatura local, en los que fueron elegidos 42 diputados. En un primer momento, la dirección del partido en el estado, apoyada por integrantes de la dirección nacional, registró una coalición electoral que excluía a Convergencia, formación política integrante del Frente Amplio Progresista (FAP) a nivel nacional, con fuerza en Oaxaca. Fue necesaria la intervención de la dirección nacional y que la diferencia se dirimiera en los tribunales.

La maniobra provocó una batalla campal entre los dirigentes perredistas a escala nacional y local, en la que sus integrantes se acusaron unos a otros de traición y denunciaron alianzas con el gobernador Ulises Ruiz.

Esta ruindad se hizo presente una vez más con la exclusión en sus listas de candidatos a diputados de connotados dirigentes sociales ligados a la APPO, con arraigo social y

capacidad de convocatoria. En lugar de ellos, fueron postulados miembros de las *tribus* locales, en su mayoría desconocidos y con muy pocas posibilidades de triunfo. Las listas de diputados plurinominales fueron confeccionadas con familiares de diputados locales, funcionarios de la administración estatal y dirigentes del partido; y los integrantes de la APPO fueron ubicados en lugares donde no tienen asegurada su llegada al Congreso.

La participación o no en las elecciones locales en la entidad fue motivo de intenso debate dentro de la Asamblea. Finalmente, ésta acordó mantener una postura unitaria y llegar a acuerdos consensuados. Expresó su falta de confianza en que los partidos políticos pudieran resolver los problemas del pueblo. Aseguró que su lucha iba más allá del proceso electoral. Ratificó su carácter de movimiento de masas amplio, democrático, plural e independiente del Estado y de los partidos políticos.

La APPO consideró que el proceso electoral estaba caracterizado por la antidemocracia, la inseguridad y por la falta de garantías de respeto a la voluntad popular. Por ello convocó a emitir un voto de castigo a los candidatos de Ulises Ruiz y sus aliados. Asimismo, acordó continuar las movilizaciones y acciones para la transformación profunda del estado y la salida de quien ostenta la gubernatura.

En tanto movimiento plural, la Asamblea aprobó respetar la decisión de las organizaciones que, dentro del ámbito de su autonomía, decidieron participar en las elecciones o no hacerlo.

La APPO fijó además una regla muy importante para regular la intervención en los comicios: no ser al mismo tiempo concejal de la Asamblea y ocupar un cargo público. Por lo tanto, los concejales que decidieran participar tenían que dejar su cargo con carácter de irrevocable.

La coyuntura electoral confrontó a la APPO con sus propias contradicciones. Una parte muy importante de sus integrantes decidieron participar electoralmente. Tenían como referencia inmediata la apabullante victoria que el movimiento popular consiguió en los comicios federales de julio de 2006. Pensaron que desde allí se podía dar continuidad a la demanda de renuncia de Ulises Ruiz. Otros, en cambio, optaron por no hacerlo, y algunos más plantearon boicotear el proceso.

La decisión de las organizaciones sociales de asistir a los comicios se topó, de inmediato, con la estrechez política del PRD. La *partidocracia* puso toda clase de candados para limitar la inclusión de quienes deseaban pactar una alianza electoral. Un dirigente nacional del sol azteca les pidió no postular a líderes del movimiento, no fuera a ser que apareciera una

foto de alguno de ellos aventando piedras y entonces se pensaría que el partido es “violento”.

Al final, los perredistas se quedaron con la mayoría de las candidaturas con posibilidades de triunfo y colocaron en algunas posiciones claves a personas identificadas con Ulises Ruiz.

Que se vayan todos

Finalmente, el verdadero triunfador de los comicios oaxaqueños del 5 de agosto de 2007 fue el voto de castigo a todos los partidos. En las elecciones para renovar la Cámara de Diputados local todas las formaciones políticas perdieron las elecciones. Los ciudadanos, simple y llanamente, desertaron de la contienda partidista.

¡Que se vayan todos! Ese fue el enérgico mensaje enviado a la clase política oaxaqueña. Los pueblos están hartos de la partidocracia y sus politiquerías, de los políticos profesionales y sus marrullerías, de quienes están en el gobierno y de quienes dicen ser opositores parlamentarios. Ni les creen, ni les confían, ni los quieren.

Sólo asistió a las urnas uno de cada tres posibles votantes. En muchas comunidades indígenas la abstención fue aún mayor. Apenas votó 10% del padrón electoral. Si la gente que ha luchado por cambiar a la sociedad y a la política en Oaxaca no salió a sufragar, es porque está convencida de que, más allá de las siglas en las que se arropan, los políticos tradicionales son todos iguales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en juego todas las mapacherías que forman su capital político y, a pesar de ello, sólo logró recoger una votación similar a la que obtuvo Roberto Madrazo como candidato presidencial. Pero en esto no hay novedad. No en balde Ulises Ruiz, a pesar del descalabro en los comicios federales del año pasado, es uno de los mayores defraudadores electorales del país. El voto a favor de los candidatos del tricolor fue comprado en comunidades marginadas del estado con meses de anticipación, con cargo al erario. La coacción se dejó sentir en las regiones donde aún dominan los caciques. El embarazo de urnas, los carruseles y la alteración de actas estuvieron a la orden del día.

Los comicios se efectuaron en medio de un clima de intimidación y terror gubernamental hacia la oposición popular. Muchos dirigentes sociales tuvieron que pasar a la clandestinidad o, cuando menos, salir del estado para no ser detenidos o agredidos físicamente; otros, de plano están en la cárcel. En plena campaña se realizaron detenciones arbitrarias.

Por supuesto, en esas condiciones el PRI se llevó el carro completo. ¿Por qué ahora iba a ser distinto? Los demás partidos demostraron que a la hora de la verdad, se comportan casi igual que el Revolucionario Institucional. ¿Por qué la gente iba a apoyarlos?

La derrota electoral no fue responsabilidad de un movimiento popular que, mayoritariamente, vio con desconfianza los comicios. El PRD hizo todo para perder. Y lo hizo muy bien.

Las organizaciones de la APPO que a título individual se involucraron en la campaña quedaron relegadas a posiciones sin importancia, y sin recursos económicos significativos para hacer proselitismo. Al participar electoralmente sin tener el consenso del conjunto de los integrantes de la Asamblea, lastimaron aún más la precaria unidad alcanzada. Otras, con una larga y eficaz tradición de lucha electoral, bloqueadas por la burocracia perredista, optaron por integrarse a las listas de partidos como Alternativa Socialdemócrata. El voto opositor de quienes deseaban participar en la contienda terminó dispersándose.

En el mejor de los casos, el PRD se comportó como si fuera a obtener automáticamente el porcentaje y las curules alcanzadas durante los pasados comicios federales de 2006, sin tener que abrir sus listas a los candidatos del movimiento popular. Creyó que los ciudadanos que hace poco más de un año castigaron al PRI y al Partido Acción Nacional (PAN) son realmente simpatizantes leales a sus siglas.

Así las cosas, el ¡que se vayan todos! del pasado 5 de agosto fue, también, una indicación del rumbo que la sociedad oaxaqueña ha decidido seguir para cambiar las cosas en su entidad: la organización y movilización desde abajo. Una ruta lenta pero, en las actuales circunstancias, la única eficaz.

Oaxaca y los derechos humanos

Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser un gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director Jurídico y de Gobierno, y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.

Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución, de proteger a los pederastas.

Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del Ejecutivo estatal.

No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad.

En la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, realizada el pasado 14 de noviembre, cuatro amigos de Brad Will interrumpieron la sesión para denunciar los abusos perpetrados en Oaxaca contra los luchadores sociales. Varios congresistas retomaron el asunto durante la sesión.

Entre los reportes internacionales elaborados destacan el producido por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) luego de su quinta visita, del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero de 2007. También el redactado por Amnistía Internacional quien, después de una larga investigación, culminó con una misión entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, dos informes del Servicio Internacional de Paz, Oaxaca.

La situación es tan grave que la CIDH le ha dedicado tres audiencias especiales, más una visita de su presidente en el mes de agosto de 2007. Según este organismo, “la situación por la que atraviesa el estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.

El último capítulo de esta observación internacional de los derechos humanos en Oaxaca fue protagonizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y por la Obra Diacónica Alemana (ODA).

La Misión de la CIJ/ODA presentó las conclusiones de su trabajo de investigación donde advierte haber encontrado un verdadero clima de terror en la población. “Los

abogados de derechos humanos —dice— insistieron en que no hay un mayor registro de violaciones a estos derechos porque la gente tiene miedo, más en las afueras que en el centro de la ciudad capital”.

Dos derechos, entre otros, fueron objeto de preocupación especial de la Misión por su incidencia en la negación de los demás: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. De acuerdo con su informe, “la violación del derecho a la justicia se ha traducido en la impunidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad física y síquica, de la libertad de expresión y opinión; de reunión y de asociación, tanto por no garantizar su legítimo ejercicio, como por no sancionar sus trasgresiones; y la violación del derecho humano a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo”.

El gobierno de Ulises Ruiz ha justificado su comportamiento esgrimiendo su obligación de proteger la seguridad

de los ciudadanos de su entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Misión, “hoy éstos viven con más inseguridad que en otros periodos de su historia, y ello se debe a un enfoque autoritario de seguridad, que no asume los dramas de una parte muy grande de la población del Estado”.

En Oaxaca, pues, no se respetan los derechos humanos. Pero esto no parece preocupar mucho a los poderes de la Unión y a buena parte de los medios de comunicación, quienes se alarman con las protestas ciudadanas contra el autoritarismo, pero guardan silencio frente a los abusos del sátrapa local.

Casi nada sucede para el poder. El dolor de los deudos, la rabia de los compañeros, el temor de los vecinos, la solidaridad de los paisanos, son ignorados arriba. Los sacrificados son cadáveres sin nombre, presos sin biografía, heridos sin memoria. No lo dicen, pero el silencio de los poderosos ante tanta atrocidad sugiere que piensan que las víctimas merecieron lo que les sucedió. En Oaxaca la memoria sigue viva y la justicia no llega.

¿Ciudadanos en uniforme? Fuerzas Armadas y democracia

COYUNTURA: **Pablo Ospina Peralta**. Ecuador: entresijos de una encrucijada. **Luis Fernando Mack**. El ocaso de los patriarcas. Un análisis de las elecciones de Guatemala de 2007.

APORTES: **Jordi Borja**. Miedos, segregación y mercado en la ciudad globalizada.

TEMA CENTRAL: **Francisco Rojas Aravena**. El riesgo de la superposición entre las políticas de defensa y seguridad. **David Pion-Berlin**. Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente. **Lilian Bobea**. Mujeres en uniforme: la feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso dominicano. **Alejo Vargas Velásquez**. Una convivencia inesperada. Fuerzas Armadas y gobiernos de izquierda en América Latina. **Rut Diamint**. La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina. **Bernardo Arévalo de León**. Un problema de Estado. Límites y retos a la subordinación militar en Guatemala. **Jorge Zaverucha**. La militarización de la seguridad pública en Brasil. **Paz Verónica Milet**. Desafíos externos e internos a la política de defensa en Chile. **Marcos Pablo Moloeznik**. Las Fuerzas Armadas en México: entre la atipicidad y el mito. **Deborah Norden**. ¿Autoridad civil sin dominación civil? Las relaciones político-militares en la Venezuela de Chávez.

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago a <info@nuso.org> o <distribución@nuso.org>.

Publicaciones de la UAM-Azcapotzalco

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Para adquirirlas
puede dirigirse a
las librerías de la
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

Informes:

UAM-Azcapotzalco, DCSyH
Coordinación de Difusión y
Publicaciones. Tel. 53 18 91 09
web.[www.azc.uam.mx/csh/
publicaciones](http://www.azc.uam.mx/csh/publicaciones)
e_mail:ldr@correo.azc.uam.mx

